

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, treinta (30) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario instaurado por ARMANDO DE JESÚS PINEDA BARRIENTOS en contra de NUTRIMENTOS SUPER S.A.S. (Radicado 05001-31-05-021-2018-00157-01).

ANTECEDENTES

El demandante inició este juicio para que se declare su calidad de trabajador frente a Nutrimentos Super S.A.S. bajo la concepción de un contrato realidad celebrado de forma verbal y ejecutado entre el 04 de julio de 1999 y, en consecuencia, se condene a la demandada al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales causadas, las vacaciones, la indemnización moratoria regulada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la indexación y las costas del proceso.

En respaldo a sus aspiraciones narró que presta sus servicios a la demandada de forma subordinada desde el 04 de julio de 1999 hasta la fecha como coterero devengando un salario mensual de \$2.400.000, cumpliendo un horario de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., que en ocasiones se extiende porque debe llegar más temprano sin que se remunere el tiempo extra, y cuyo incumplimiento acarrea sanción disciplinaria. En el año 2012 fue

conminado a firmar un contrato por prestación de servicios de lo contrario, sería retirado de sus labores. Explica que en todo el tiempo laborado nunca le han sido canceladas las prestaciones sociales ni ha sido afiliado al Sistema de Seguridad Social, a más de no serle suministrados los elementos de seguridad para minimizar el riesgo de accidentes de trabajo, que en efecto presentó para los años 2013 y 2016. El 21 de febrero de 2018 recibió una comunicación de la empresa donde le informaban que el contrato terminaría el 04 de junio de 2018 pero que se renovaría nuevamente.

Nutrimentos Super S.A.S. se pronunció sobre los hechos y pretensiones, negando la existencia de un contrato de trabajo con el demandante, advirtiendo que la prestación de sus servicios como coterero se dio de manera independiente, por medio de un contrato civil suscrito el 05 de junio de 2012 y que finalizó el 04 de junio de 2018, cuyo cargue y descargue lo realizaba acorde a la disponibilidad sin cumplimiento de horario. Como excepciones de fondo formuló las que denominó inexistencia de las obligaciones demandada, falta de título y causa en el demandante, cobro de lo no debido, prescripción, pago, compensación y buena fe.

En ese marco procesal, el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia el 18 de noviembre de 2021, en la que ABSOLVIÓ a la demandada de las pretensiones instauradas en su contra, DECLARÓ probada la excepción de ausencia de subordinación y CONDENÓ en costas al demandante, fijando las agencias en derecho en el equivalente a medio SMLMV.

El demandante aspira a que se revoque la decisión absolutoria, aduciendo que el Juzgado de conocimiento no tuvo en cuenta para definir la litis el interrogatorio de parte absuelto por el demandante donde señala que además del cargue y descargue, de parte de la señora Lucy provenían otras órdenes relacionadas con sus labores en tiempos libres, y que hubo compañeros que estuvieron sometidos al régimen sancionatorio. Adujo que igualmente se echó de menos el tiempo suplementario que en ocasiones les era exigible sin posibilidad de sustraerse de cumplirlo so pena de asumir amonestaciones, agregando que Armando como líder de cuadrilla organizaba y coordinaba el trabajo, lo que no da cuenta de una ausencia de subordinación de parte de la empresa.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado

CONSIDERACIONES

Atendiendo la materia del recurso de alzada, la Sala limitará su estudio a los puntos objeto de inconformidad planteados por el apoderado recurrente en virtud al principio de consonancia, radicando el problema jurídico en definir si entre el demandante y Nutrimentos Super S.A.S, existió o no un contrato de trabajo, en el que el demandante tuvo la calidad de trabajador, y en caso positivo, si procede la condena de los emolumentos pedidos.

Para resolver, ha de señalarse que resultan de especial importancia los mandatos de los artículos 22, 23 y 24 del C.S. del T, en tanto estas disposiciones remiten al concepto y elementos esenciales de un contrato de trabajo, última disposición normativa que establece:

“Presunción. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”.

Esta presunción, lo ha dicho y reiterado la jurisprudencia laboral en infinidad de providencias, se trata de una ventaja probatoria para quien invoque su condición de trabajador, pero admite prueba en contrario, lo que se traduce en que si se pretende demostrar la existencia de otro vínculo contractual, civil, comercial o administrativo, que de pie a la ausencia del elemento subordinación o dependencia jurídica, o la ausencia de remuneración, la carga de prueba corre por cuenta del empleador, dada la imposición del artículo 167 del CGP, correspondiéndole, en consecuencia, el deber de desvirtuar la subordinación o dependencia.

Ahora bien, no discutiéndose por las partes los servicios prestados por el actor en su oficio de coterero, ni la existencia de una remuneración, a la convocada a este juicio le recae la obligación procesal de acreditar con el fin de derruir la existencia de un vínculo contractual laboral que la realización de la labor se ejecutó de manera autónoma e independiente.

Para esclarecer este punto, es preciso tener en cuenta que la subordinación, en su más moderno significado, es una potestad del empleador para someter al trabajador *“a la esfera organicista, rectora y disciplinaria de la empresa”* y para evaluar los indicios de la presencia de este elemento dentro de una relación aparentemente autónoma, en sentencia CSJ SL1439-2021, la Corte acudió a la Recomendación 198 de la OIT, considerando que el sentenciador debe echar mano de los *“datos fácticos relevantes que denoten el ejercicio de facultades empresariales de organización, dirección y control de las condiciones de trabajo”*.

Asimismo, la H. Corte Suprema de Justicia en sentencia SL4479-2020 reiterada en la SL1042-2022, destacando la importancia de los indicios de subordinación, partió de la forma en que deben analizarse dichos criterios de búsqueda de la dependencia, en aras de dilucidar la existencia de una verdadera relación laboral, así:

“Cuando el empleador organiza de manera autónoma sus procesos productivos y luego inserta al trabajador en ese ámbito para dirigir y controlar su labor, según esos fines empresariales, se estará ante un indicio claro de subordinación. El trabajador que no tiene un negocio propio, una organización empresarial suya con su propia estructura, medios de producción, especialización y recursos, sino que se ensambla en la de otro, carece de autonomía. No se trata de una persona que desarrolla libremente y entrega un trabajo para un negocio, sino que su fuerza de trabajo hace parte del engranaje de un negocio conformado por otro”.

Sobre el particular, la doctrina autorizada ha señalado que el criterio en cita tiene la peculiaridad de englobar una tríada de conceptos: integración, organización y empresa. De modo tal que este indicio se traduce “en la inserción o disponibilidad del prestador de servicios dentro del ámbito de dirección y organización del beneficiario, esto es, en la esfera de la empresa a su cargo”, premisa de la que se deriva suficientemente “el carácter dependiente o subordinado de la prestación de servicios”.

Al trasluz de lo expuesto, se tiene que previo a analizar de manera conjunta la prueba con la que se cuenta, premisa a partir de la cual el recurrente basa su disenso y enrostra una sentencia contraria a lo acreditado en la litis, debe decirse atendiendo a que uno de los argumentos para soportar el ataque, está referido a que el Juzgado omitió la valoración del interrogatorio de parte absuelto por el actor, que la sola manifestación del accionante para sustentar

¹ Tomás Sala Franco, Derecho del Trabajo, 8 ed., 1994, pág. 181

las pretensiones iniciales es inaceptable, en tanto ello iría contra del principio según el cual la parte no puede fabricar su propia prueba, sosteniendo al respecto la H. Corte Suprema de Justicia en nuestra especialidad que *“a ninguna de las partes le es dable producir sus propias pruebas, es decir, que la parte que hace una declaración de un hecho que lo favorece, no puede pretender en el proceso hacerlo valer en su propio beneficio”* (Ver SL3398-2022), lo que denota ser imperativo arribarse probanzas adicionales a las afirmaciones de las partes para apoyar o derruir sus dichos.

En ese orden encuentra esta colegiatura que de las probanzas escritas, no es dable extraer las condiciones en las que el actor prestó su servicio a la demandada bajo el concepto de contrato realidad, resultando insuficiente para desentrañar la verdadera naturaleza jurídica que unió a las partes, pues más allá de verificarse una contratación formal civil (Págs. 248-249 Archivo 02) que derivó en una afiliación en calidad de independiente del actor con pago de honorarios a partir de diferentes cuentas de cobro (Págs. 3-34 y 35-247 Archivo 02), y dos comunicaciones en las que la empresa demandada por un lado implementó unas reglas para el ingreso y permanencia en las instalaciones (Pág. 21 Archivo 09) y amonestó a una cuadrilla (Pág. 264 Archivo 02), ningún elemento de juicio documental fehaciente se aporta, tornándose en necesario acudir a los demás medios instructores que obran en el proceso para definir si la presunción aplicable por la indiscutida prestación de los servicios del actor en las instalaciones de la demandada como coterero fue desvirtuada.

Para tal efecto fueron recepcionados los testimonios de LUCIDIA INÉS ÁVALOS MOLINA y LUZ KARINA POSADA PÉREZ traídos por la pasiva, cuya generalidad en los dichos da cuenta que dentro de las instalaciones de la compañía accionada el actor prestó sus servicios como coterero o estibador, encargándose junto con otros compañeros que conformaban una cuadrilla del cargue y descargue sea de materia prima o producto terminado, lo que era ejecutado bajo instrucciones del supervisor - Luis Guillermo - o la encargada de despachos - Lucy- en tanto se le indicaba qué producto y cantidad cargar o donde ubicar la materia prima recibida, quienes definían bajo su arbitrio la forma de trabajar, cuadraban los reemplazos y avisaban de ausencias sin que tuvieran que pedir permisos, que no tenían un horario establecido pues ellos se acomodaban al tiempo de apertura y cierre de la empresa, a quienes se

les indicaba qué carro iba a llegar y en qué horario para que a voluntad de ellos definieran el reparto de la labor. Que los pagos se realizaban según lo acordado con el cliente por la empresa o por el transportista, cuyo trámite ante la sociedad era que Lucy elaboraba unas cuentas de cobro, las revisaban y firmaban, recibían en caja el dinero y luego Armando como líder de cuadrilla por conocer quién asistió en la semana y qué cargues y descargues se hicieron repartía el dinero, precio del servicio que era fijado por ellos mismos conforme al valor fijo del gremio.

De parte del polo activo, se recibió el testimonio de CARLOS LABERTO RODRÍGUEZ PATIÑO quien se desempeñó como jefe de planta en Nutrimentos Super S.A.S. por un término de 15 años desde aproximadamente el año 2001, quien en semejantes términos a los anteriores deponentes señaló haberse prestado el servicio de parte del demandante sin imposición de horarios, cuyo tiempo y forma de trabajar era definida por la cuadrilla liderada por Armando, y donde las órdenes e instrucciones se limitaban a dirigir de cuáles arrumes coger el producto y a qué carro cargarlos , sin imposición de su parte ni de Lucy del régimen disciplinario.

En contraposición a esos dichos, solo declaró JOSÉ LUIS PATIÑO CASTRILLÓN, también testigo del actor, quien presta sus servicios a la demandada como coterero desde 1995, y afirmó que los estibadores estaban sometidos al horario de la empresa debiendo en ocasiones acudir desde las 5:00 a.m. por imposición efectuada por Lucy, ante quien debían tramitar permisos para ausentarse de las instalaciones donde prestaban el servicio, aunque siempre decían que sí, estando sometidos al reglamento pues hubo personas sancionadas por no hacerse presentes. Que el pago lo realizaba en un 80% la empresa y en un 20% los transportadores dependiendo del negocio realizado, que Lucy daba la factura y se cobraba en la caja negando la existencia de cuadrillas.

A partir de lo anterior, encontrando coherencia absoluta en las afirmaciones de Lucidia Ávalos, Luz Karina Posada e incluso, Carlos Alberto Rodríguez, de quienes se vislumbra una conducta espontánea y clara de cara a lo debatido, cuyo conocimiento directo es indudable, es que se forma el convencimiento para esta Sala de Decisión de que lo debidamente probado es que el vínculo

que existió entre las partes fue uno de naturaleza civil por las conclusiones que pasarán a exponerse.

En efecto, la demandada aceptó que el demandante prestó los servicios en sus instalaciones, también admitió y así quedó demostrado que exigía a los coteros como a todo el personal interno y visitantes externos la satisfacción de unos requerimientos para promover la seguridad industrial, y que habían instrucciones suministradas en cuanto a cuál producto cargar y donde descargar la materia prima, lo que entraña bajo raciocinios de lógica por un lado, la implementación de medidas a fin de propender por la seguridad de las personas que ingresan permanentemente a sus instalaciones y de promover el orden interno, y por el otro, de ejercer un control sobre el producto y el despacho que está bajo la responsabilidad de la comercializadora, sin que tales directrices supongan indefectiblemente que el demandante como coterero fuera su colaborador en el sentido estricto del contexto laboral, sino que lo que se desprende es una actuación de coordinación y verificación de la actividad contratada (Ver SL166-2022) que no configura una instrucción típicamente laboral porque no había propiamente una intervención en cuanto al tiempo y modo en el que debía ejecutar el oficio, ya que éste bajo su autonomía y arbitrio en unión con el resto de los estibadores sin ningún tipo de injerencia de parte de la compañía, acordaban qué vehículo atender y se repartían el trabajo, que no iba más allá del cargue y descargue de mercancía, actividad que por demás es ajena a las propias y del objeto social de la demandada² (Págs. 251-262 Archivo 02), cuyo transporte se constituye en una gestión adicional susceptible de ser contratada con terceros y en esa medida también su cargue y descargue; tan es así, que en oportunidades, era el cliente quien asumía el traslado y el conductor el encargado de remunerar esa asistencia.

Debe decirse que la prestación del servicio dentro de las instalaciones de la empresa no desmerita la autonomía que caracteriza la modalidad contractual civil, pues ello se explica de la basta y simple razón de ser de allí de donde surge la producción de la mercancía a transportar y donde en igual sentido debe llegar la materia prima, careciendo de sensatez aducir dada la esencia de la labor, que sea otro el espacio físico donde pudiese ser ejecutada.

² Principalmente la producción y comercialización de alimentos concentrados para animales.

Se dejó en evidencia que los coteros no estaban sujetos a un horario determinado, sino que por motivo de ir al encuentro de sus propios intereses económicos, hacían presencia en la empresa dentro de igual horario de funcionamiento e incluso por fuera de él cuando se les mencionaba sobre el ingreso de un vehículo con mercancía o materia prima, pues no en otro momento podían realizar su actividad y obtener los beneficios monetarios que cada cargue y descargue producía.

De ese modo, era posible para los estibadores, incluido el demandante, gestionar el manejo de los tiempos de permanencia en la empresa a su conveniencia, sin consecuencias imputables para quien no asistiera o estuviera disponible en un espacio temporal u otro, irrumpiendo evidente que a efectos de respetar la logística y conservar la posibilidad de ejecutar esa labor en la empresa, se daba aviso sobre las ausencias al líder de cuadrilla que estaba contratado bajo iguales condiciones pero hacía las veces de representante de estos prestadores, siendo ajeno a la empresa pero delegado para efectos organizacionales del grupo, sin existencia de un poder superior proveniente de la contratante o tercera persona que impusiera límites, prohibiciones o impedimentos al respecto.

El pago por el servicio brindado era fijado por los mismos estibadores e informado al contratante acorde al precio generalizado del mercado, y la remuneración estaba supeditada al número de servicios cumplidos cuya cancelación se daba a partir de cuentas de cobro realizadas por Lucidia Ávalos - Encargada de despachos- concretada en efectivo de parte de Rosmary - cajera-, desembolso que se consumaba una vez corroborado que el servicio facturado si se haya prestado y viceversa con constatación del inventario, circunstancia que también proviene del deber de control que Nutrimentos Súper S.A.S como dueña de los recursos económicos debía tener para efectos de imponer el pago total sobre cargues y descargues ciertamente realizados de manera semanal y que estuvieran a su cargo por negociación con el cliente, cuya partición de los dineros estaba en cabeza del líder del grupo según el número de unidades manipuladas por cada uno, lo que estaba bajo su conocimiento exclusivo según distribución concertada entre ellos y por fuera de la supervisión de la enjuiciada.

Es importante precisar que la documental a través de la cual Nutrimentos Super S.A.S impone un descuento económico a la cuadrilla por encontrar a uno de sus integrantes acostado en los arrumes de producto (Pág. 264 Archivo 02), aun cuando no contiene suscriptor, tiene plasmado el logo de la sociedad, pero no se constituye en idónea y con la entidad suficiente de destruir lo que las demás probanzas revelan y que en conjunto reflejan las circunstancias a partir de las cuales el demandante como estibador ejecutaba este oficio, ni da paso a estimar que bajo esa imposición que pudiera decirse, es sancionatoria, el demandante estuviera sometido al reglamento de Nutrimentos y que en ese orden, se incluya como uno de sus trabajadores, sino que lo que pudiere pregonarse en el entorno generalizado de la prestación del servicio, es que si bien el señor Pineda Barrientos no estaba sometido a los estándares de la empresa y contaba con total independencia para dar cumplimiento a la tarea contratada, no quiere decir que la pasiva deba soportar conductas desplegadas por terceros o contratistas que transgredieran el orden y los protocolos en cuanto al manejo del producto, por lo que pedir compostura y cautela e incluso dar a conocer ciertas reglas de comportamiento dentro de la organización relacionadas con el objeto contractual, no desfasa las facultades del contratista ni implica un rasgo de subordinación y dependencia con la sociedad contradictora. Cosa distinta es que la amonestación pecuniaria contraría el clausulado contractual, aspecto no debatido en esta litis.

De modo que, en análisis a la naturaleza de la actividad y la manera cómo se llevó a cabo en coherencia con lo que las reglas de la experiencia delatan y partiendo de la sana crítica, esta Sala de Decisión Laboral no evidencia como bien lo concluyó el *a quo* el ejercicio de una labor subordinada sino autónoma, dadas las condiciones que rodearon la prestación del servicio, donde contrario a lo que advierte el recurrente, el demandante desarrollaba su oficio libremente cuyas condiciones de tiempo o modo surgían desde su propia necesidad o meta económica con respeto a la coordinación desde la cuadrilla de la que era líder, encontrándose en esta oportunidad desvirtuada la presunción legal del vínculo laboral.

Tal conclusión entonces, conlleva a confirmar la sentencia absolutoria venida en apelación.

Acorde a lo dispuesto en el artículo 365-3 del Código General del Proceso las costas en esta instancia son a cargo del demandante. Se fijan las agencias en derecho en la suma de \$500.000.


DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia apelada de fecha y procedencia conocidas.

Costas a cargo del demandante. Se fijan las agencias en derecho en la suma de \$500.000.

Notifíquese por EDICTO.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÓN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIERREZ SALAZAR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA
EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación: 05001310502120180015701
Proceso: Ordinario
Demandante: ARMANDO DE JESUS PINEDA BARRIENTOS
Demandado: NUTRIMENTOS SUPER S.A.S.
M. P. CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo: 30/11/2022
Decisión: CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 1/12/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario